

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de distrito de San Luis Potosí por el C. Pánfilo García, contra la ocupacion del mezon de S. Ignacio, de que es arrendatario, por una fuerza militar.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito del Estado. Gregorio Vazquez, Promotor Fiscal del Juzgado del Distrito, alegando de buena prueba en el juicio de amparo promovido por D. Pánfilo García, ante V. con las protestas oportunas, parezco y digo: que ese juzgado tendrá á bien dispensar el amparo que solicita el peticionario, por haber sido violadas en su persona las garantías que otorga á los CC. la carta fundamental de la República en sus artículos 26 y 27.

No cree el Ministerio que sea necesario mucho esfuerzo para demostrar las sólidas razones que para ello ocurren, y por eso, sin cambiar de la opinion que tiene emitida en su parecer de 25 del pasado, el cual dá por reproducido en todas sus partes, insiste en pedir en favor de García el amparo que pretende.

Durante el término probatorio concedido por V. para justificar los hechos violentos á que alude el peticionario, ha presentado cinco testigos, que uniformes cuatro de ellos en sus deposiciones, han declarado ser cierto, que sin consentimiento del quejoso y causando maltratos de palabra y hecho al servicial encargado del mezon de S. Ignacio, fué introducido violentamente el Batallón número 16 sin pagar previamente lo que correspondia por el alojamiento, que por sí y ante sí se proporcionaba á aquella fuerza. Tales testigos, en el número que han sido presentados, y en su calidad de personas presenciales é independientes, no han sido tachadas, y por lo mismo se les debe considerar y tener como libres de toda excepcion y con la capacidad necesaria para dar testi-

monio en juicio. Se tiene pues la prueba testimonial, plena y perfecta que en el caso conviene, y ella por sí es bastante para justificar los hechos acusados.

Por lo que respecta á la instrumental, solo se tienen á la vista el informe dado por la Jefatura Superior de Hacienda, y los producidos por el Coronel en Jefe de la guarnicion, y el del Jefe Político del partido de la Capital. En cuanto á estos dos últimos, se palpa de bulto la contradiccion que envuelven, pues mientras que aquel jefe militar conviene en que mandó alojar aquella fuerza en virtud de la contrata que asegura tiene la dicha Jefatura de Hacienda con el mezon de S. Ignacio y otros, el Sr. Jefe político solo dice, que hubo tal contrata hasta Octubre del año pasado, y que no intervino en nada ni se contó con su autoridad para el alojamiento mandado dar al cuerpo número 16.

Se deduce de esto, que solo la autoridad militar, sin contar con la política que es á quien incumbe señalar los alojamientos, mediante boleta en forma que así lo determine, dispuso arbitrariamente el respectivo alojamiento sin las formalidades prescritas por la ley; y por consecuencia, con tal hecho incurrió en esa violacion de garantías de que se ha quejado justamente el solicitante.

Por otra parte, esa contrata de la Jefatura de Hacienda, de que tanto se hace mérito, no ha existido por un término señalado para disponer los alojamientos, toda vez que sea necesario, para los cuerpos del ejército, pues aquella oficina en el informe rendido, aunque habla de contrata, se refiere á la estipulada al tiempo de los anteriores alojamientos, y no de una cosa ya dispuesta y preparada de antemano para cuando fuese menester; y ni es ni puede explicarse esto de otra manera, porque á ser como se pretende, resultaría que la dicha Jefatura de Hacienda comprometia los fondos de ella para objetos muy eventuales é inciertos, por no ser aquellos hospedajes una cosa perpetua y

segura que evitaba todo gasto inútil que en ella se hiciera. Por lo mismo, ese contrato tantas veces repetida, debe entenderse de la que se celebra y está mandada celebrar tan luego como se dispone por la autoridad política el alojamiento que se necesita.

En vista de lo expuesto y demás razones que no se ocultarán á la ilustrada penetración de ese juzgado, el Ministerio espera que se servirá proveer de entera conformidad con lo que deja pedido al principio, por ser de justicia, que protesta con lo demás necesario, &c.—S. Luis Potosí, Febrero 12 de 1873.—*Gregorio Vazquez.*

Sentencia del Juez de Distrito.

San Luis Potosí, Marzo 12 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Pánfilo García, vecino y del comercio de esta Capital, contra el acto de la ocupación violenta por fuerzas federales del mezon de S. Ignacio, de que es arrendatario.

Considerando: que de autos consta que el C. Comandante militar de la plaza, aunque pidió, no obtuvo en Enero último del C. Jefe Político del partido de esta Capital, la boleta de alojamiento que correspondía, sin cuyo requisito no pudo hacerse la ocupación del mezon, conforme al artículo 2º fracción 4ª de la ley de 1º de Febrero de 1856, y artículo 2º fracción 26 de la ley número 39 de la actual 4ª H. Legislatura del Estado.

Que el mismo C. Comandante militar no ha probado la existencia del contrato de arrendamiento que dice haberse celebrado por la Jefatura de Hacienda, como debía haberlo hecho, acompañando á su informe con justificación copia de la escritura de arrendamiento, ó refiriéndose á la que debe existir en dicha oficina, la cual á su vez no ha comprobado ese contrato, pudiendo hacerlo con motivo de la comunicación que á instancia del actor se libró, todo conforme al principio universal de jurisprudencia, que la pro-

TOMO IV.—PARTE II.

ba incumba al que afirma y no al que niega.—Que también consta de autos, que la ocupación del mezon de S. Ignacio fué hecha sin consentimiento del quejoso, apesar de su tenaz oposición y con violencia de las fuerzas federales, siendo así que el Estado gozaba y goza de plena paz, no eran ni son las circunstancias extremas, por lo cual con ese hecho se ha infringido el artículo 26 de la Constitución federal.—Que aparece que no se han pagado las rentas del mezon en el tiempo que ha estado ocupado por las fuerzas federales, contra lo prevenido en el artículo 27 de la misma Constitución, aunque es verdad que el cobro de ellas debe hacerse en distinto juicio.—Por tales consideraciones y fundamentos legales expresados, debía declarar y declaro.—Primero: de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal, la Justicia de la Unión ampara y protege al C. Pánfilo García, vecino y del comercio de esta Capital, contra el acto de la ocupación violenta por fuerzas federales, del mezon de S. Ignacio, del que es arrendatario y contra lo que se interpuso este recurso.—Segundo: se dejan á salvo sus derechos al mismo Pánfilo García contra la Hacienda pública, para demandarle en el juicio correspondiente el pago de las rentas devengadas por dicho mezon.—Notifíquese, publíquese en los periódicos de estilo y elévense estas actuaciones á la Corte Suprema de Justicia para su revisión.—Así definitivamente juzgando lo decretó, mandó y firmó el C. Jefe. Conrado Díaz Soto, Juez de Distrito del Estado. Damos fé. Firmados.—*Conrado Díaz Soto.*—*Rafael Guzman.*—*Feliciano P. Reyes.*

Es copia que certifico. S. Luis Potosí, Marzo 12 de 1873.—*Conrado Díaz Soto*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 1º de 1873.—Visto el juicio

cio de amparo promovido ante el juez de Distrito de San Luis Potosí, por el C. Pánfilo García, contra la ocupacion que una fuerza militar ha hecho del mezon llamado San Ignacio, y del que es arrendatario el referido García. Considerando: que no consta de autos que esa ocupacion se haya verificado en virtud de algun contrato, ó con pleno consentimiento del quejoso, sino al contrario, las mismas constancias del expediente revelan que García ha protestado desde el principio contra dicha ocupacion; que tampoco se encuentra alguna razon legal que justifique el acto que ha motivado este recurso, resultando de todo, que con la expresada ocupacion se ha infringido lo prevenido en el artículo 26 de la Constitucion, se decreta: que por sus propios legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el C. juez de Distrito de San Luis Potosí en 12 de Marzo último, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Pánfilo García, contra el acto de la ocupacion por fuerzas federales del mezon de San Ignacio, y contra el que se interpuso este recurso.—Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Juan A. Mateos*, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 16 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

De garantías promovido ante el juzgado 2º de distrito de México, por Antonio Reyes, contra la comandancia militar de esa plaza que lo consignó al servicio militar.

PEDIMENTO DEL PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor que suscribe en el juicio de amparo promovido por el C. Antonio Reyes, contra la determinacion de la comandancia militar del Distrito que lo destinó al servicio de las armas contra su voluntad, supuesto el estado del juicio que es el de alegar, y haciéndolo en la forma prevenida por la ley, dice: que la justificacion de V. se ha de servir declarar en definitiva, que al Justicia de la Union ampara y protege al mencionado C. Reyes, por haber sido violadas en su persona las garantías que otorga el artículo 5º de la Constitucion, en vista de las razones que paso brevemente á manifestar.—Por las pruebas que se han rendido por el quejoso, resulta plenamente demostrado que está comprendido en las escepciones que estableco el decreto de 17 de Mayo del año próximo pasado, para que á los CC. que fuesen casados y con hijos y que vivan de su corporal trabajo, no se les pueda imponer la carga del servicio militar contra su voluntad; y como por la rebeldía de la autoridad responsable del acto reclamado en rendir el informe que previene la ley, se debe reputar por confesa del hecho con las circunstancias que se expresan por la parte agravada, y esta dice que su consignacion se ha verificado despues de la promulgacion del decreto que le favorece, se deduce sin violencia que se encuentra en las condiciones que se requirieron para que se le otorgue el amparo. Por lo que el infrascripto promotor, reproduce en conclusion la peticion que ha hecho al principio para que al C. Antonio Reyes se le otorgue el amparo que sea conforme á justicia.